Señores
MAGISTRADOS SALA DE DECISIÓN CIVIL
TRIBUNAL SUPERIOR DE ARMENIA
La ciudad

Referencia. Acción de Tutela promovida por la sociedad SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA APLICADA – SIIA – INGENIEROS ASOCIADOS S. A. S. en contra de TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA – ÁRBITRO JULIO CESAR GÓMEZ GALLEGO.

GIOVANNI ÁLZATE BELTRÁN, mayor de edad, vecino de Armenia, domiciliado en esta misma ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número **89.005.154** de Armenia, en mi calidad de gerente y representante legal de la sociedad **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA APLICADA – SIIA – INGENIEROS ASOCIADOS S. A. S.**, actuando en causa propia, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en los Decretos Reglamentarios 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, me dirijo a ustedes, muy respetuosamente, con el fin de promover **ACCIÓN DE TUTELA** tendiente a obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa (**artículo 29 de la Constitución Nacional**) en contra del **TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA – ÁRBITRO JULIO CESAR GÓMEZ GALLEGO**, con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: La sociedad que representó convocó Tribunal de Arbitramento en contra de la sociedad **CONSTRUCCIONES BUENDÍA & LÓPEZ S. A. S.**, para la solución de controversias contractuales relacionadas con contrato de obra número 005 del 1º de febrero de 2021, de acuerdo con la cláusula 24 del citado contrato que contiene cláusula compromisoria entre las partes, para la decisión de sus controversias ante Tribunal de Arbitramento.

SEGUNDO: El tribunal se conformó debidamente, siendo designado el abogado **JULIO CESAR GÓMEZ GALLEGO** como árbitro único.

TERCERO: La demanda presentada fue admitida y notificada a la convocada, quien contestó la demanda, presentó excepciones, realizó llamamiento en garantía y demanda de reconvencción, que posteriormente fue reformada.

CUARTO: Todos los medios de defensa fueron tramitados, se aceptó la demanda de reconvencción y posteriormente su reforma, las cuales fueron contestadas oportunamente.

QUINTO: Realizados estos trámites se integró el tribunal y se realizó el procedimiento de pago de honorarios y la realización de las audiencias en las que se realizaron las etapas de instrucción y alegatos.

SEXTO: El 1º de octubre de 2024 se profirió laudo arbitral, leído en audiencia de la misma fecha, en el que el árbitro designado encontró que la sociedad convocante había incumplido sus obligaciones contractuales y que, a su turno, la sociedad convocada y convocante en reconvencción si había cumplido sus propias obligaciones.

SÉPTIMO: Esas conclusiones, traen como consecuencia, que se denieguen las pretensiones de la demanda originaria del trámite arbitral y se acepten las pretensiones de la sociedad convocada en demanda de reconvencción, reformada.

OCTAVO: El laudo arbitral fue objeto de solicitud de aclaración que fue denegada en auto del 10 de octubre de 2024.

NOVENO: No existen razones que den lugar a alguna de las causales de anulación del laudo arbitral, razón por la cual, en la actualidad, el laudo está en firme, amén que no existen otros recursos para proponer.

DÉCIMO: El laudo arbitral, sin embargo, en nuestro sentir, es una providencia arbitraria, constitutiva de vía de hecho, por contener defectos fácticos y sustanciales, que hacen procedente la acción de tutela contra dicha providencia.

DERECHOS VULNERADOS

Se estiman vulnerados los derechos de defensa y debido proceso contenidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

En primer lugar, debo indicar que la tutela también procede contra laudos arbitrales, como lo ha explicado la Corte Constitucional en sentencia T-354 de 2019, en los siguientes términos:

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales

Para efectos de avalar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales, la Corte Constitucional ha equiparado materialmente a estos últimos con las providencias judiciales, por cuanto ambos son producto del ejercicio de una función jurisdiccional y tienen efectos de cosa juzgada. A este propósito, en la Sentencia SU-033 de 2018 señaló:

“La equivalencia –material- que existe entre el laudo arbitral y la providencia judicial, activa de manera excepcional la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, los cuales puedan verse afectados por las decisiones emanadas y el procedimiento llevado a cabo por los tribunales de arbitramento.”

Por tanto, la procedencia de este tipo de acciones está sometida, prima facie, a los mismos requisitos de procedibilidad, tanto generales como específicos, que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado respecto de las providencias judiciales.

Hecha esta inicial aclaración se estima que el árbitro Julio César Gómez Gallego incurrió, al proferir el laudo, en defecto sustancial y en defecto fáctico, al proferir su providencia, tal como pasa a explicarse:

EXISTENCIA DE DEFECTO SUSTANCIAL

La Corte Constitucional ha expuesto que el defecto sustancial se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica (sentencia T-208 A del 25 de mayo de 2018).

En el presente asunto, estamos en presencia de un contrato de obra, el cual está regulado en nuestro Código Civil, en los artículos 2053 a 2062 del Código Civil. En el laudo, en sus consideraciones, ni siquiera se hace mención a estas normas, que eran obligatorias tener en cuenta debido a que ese era el tema a abordar.

El laudo indica que la sociedad convocante incumplió el contrato porque no presentó programa de ejecución de obra, no realizó la obra en el tiempo dispuesto en el contrato y no ejecutó de manera debida la obra, lo que hizo que el contratante terminara con justa causa el contrato de obra y esa terminación no constituye incumplimiento del contrato.

Si el árbitro hubiere tenido en cuenta las normas que rigen el contrato de obra no habría llegado a esas conclusiones. En especial, veamos el artículo 2059 del Código Civil que dispone:

EJECUCIÓN INDEBIDA DE LA OBRA. Si el que encargó la obra alegare no haberse ejecutado debidamente, se nombrarán por las dos partes peritos que decidan.

Siendo fundada la alegación del que encargó la obra, el artífice podrá ser obligado, a elección del que encargó la obra, a hacerla de nuevo o a la indemnización de perjuicios.

La restitución de los materiales podrá hacerse con otros de igual calidad o en dinero.

En el contrato de obra no existen capítulos o cláusulas relacionadas con las formas de terminación del contrato, razón por la cual la terminación unilateral que hizo la sociedad convocada **no es legal ni jurídica**, ya que debió haber recurrido al trámite del artículo 2059, que nunca lo hizo y no terminar de manera abrupta el contrato.

Es decir, la sociedad convocada tomó justicia por cuenta propia y el árbitro no considera incumplimiento que dicha sociedad hubiere terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa y sin seguir un debido proceso para dicha terminación.

Como el árbitro omitió aplicar el artículo 2059 del Código Civil, **incurrió en defecto sustancial** pues profirió el laudo sin aplicar las normas sustanciales que rigen la materia.

EXISTENCIA DE DEFECTO FÁCTICO

Según lo ha pregonado la Corte Constitucional el defecto fáctico se presenta cuando *el juez no tiene el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que sustenta la decisión porque dejó de valorar una prueba o no la valora dentro de los cauces racionales y/o denegó la práctica de alguna sin justificación.* (Sentencia T-459 de 2017).

En el laudo atacado por vía de tutela se incurrió en ese defecto, por las siguientes razones:

1º) El laudo fundamenta el incumplimiento de la sociedad convocante en que no presentó cronograma de ejecución de la obra, no hizo la obra en el tiempo acordado y no ejecutó en debida forma el contrato.

Al valorar las pruebas, el árbitro **no lo hizo dentro de los cauces racionales**, porque en el expediente existe prueba documental y de confesión en el que se explica los retrasos en la iniciación y ejecución de las obras y por causa de quién era ese retraso.

Y no es racional la valoración del árbitro, **pues en ese punto del laudo, repite hasta la saciedad que existió tolerancia** de la sociedad convocada en esos presuntos incumplimientos y después afirma que existió incumplimiento. Si como el árbitro lo reconoce existió tolerancia ello se traduce **en el cambio de las cláusulas relacionadas con el término para cumplir y lo relacionado con el cronograma de obras.**

2º) El laudo fundamento el cumplimiento de la sociedad convocada sin indicar las pruebas que lo llevan a tal conclusión, indicando solamente que la terminación unilateral del contrato era justa y no constituía incumplimiento alguno.

El árbitro dejó de lado el contrato de obra número 005, en especial, la cláusula 16, en la que se indica que la supervisión e interventoría estaban a cargo del contratante y cómo debía ser esa supervisión e interventoría, sin que en el expediente aparezca prueba de los términos y condiciones que existían para declarar el incumplimiento y la terminación unilateral del contrato.

No observó tampoco el árbitro que en el contrato **no existen deberes del contratante**, por lo que debió remitirse a las normas sustanciales del contrato de obra, para tomar una decisión de fondo en el laudo arbitral.

En fin: tomó la decisión de declarar cumplida a la sociedad convocante, cuando terminó de manera unilateral, ilegal e impidió al contratista seguir ejecutando el contrato, sin seguir los trámites legales que aseguraran el derecho de defensa y debido proceso del contratista, **sin seguir los pasos que el mismo contrato exige y QUE EL ARTÍCULO 2059 DEL CÓDIGO CIVIL, prevé para esos casos.**

Además, encuentro que el tribunal tiene por cierto como fundamento del Laudo que, la sociedad BUENDIA Y LÓPEZ S.A.S. efectivamente si reiteró durante la ejecución de la obra la no presentación de la programación y los supuestos e inexistentes llamados de atención por atraso en ejecución; sin embargo, de las pruebas decretadas y practicadas, no se logró, bajo ningún medio, o mediante ninguna prueba verificable, comprobar estos supuestos requerimientos y con base solo en declaraciones contradictorias entre sí, de parte de la encargada de llevar las actas de obra OLGA LUCIA LONDOÑO, el Director de Obra HARBY LÓPEZ VILLAMOR y el representante legal JULIAN BUENDIA - quien no participaba en dichos comités - y desconociendo que se manifestó, sin que fuera negado por parte del contratante, que se hacía entrega de programaciones semanales por parte de la sociedad SIA S.A.S. en cada comité de obra y que efectivamente hubo atrasos atribuibles a Buendía & López S.A.S. Sin embargo, el tribunal concede en la parte considerativa del laudo, una validez irrestricta a las aseveraciones de BUENDIA Y LÓPEZ S.A.S. desechando

completamente lo probado en el proceso por SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA APLICADA - SIIA S.A.S. – INGENIEROS ASOCIADOS.

Se evidencia, asimismo, que el tribunal omite mencionar las causas de inviabilidad de cumplir el plazo contractual atribuibles a BUENDÍA Y LÓPEZ S.A.S. (Licencia de construcción en firme en fecha 02 junio de 2021 – 5 meses después de iniciado el mismo – y desconoce lo manifestado incluso por el representante legal de la sociedad BUENDIA Y LÓPEZ S.A.S. que afirmó que “nunca iniciaba un proyecto sin licencia” y que “no se puede iniciar un proyecto sin licencia” procediendo el Tribunal de Arbitramento a atribuir el 100% de responsabilidad de incumplimiento a SIIA S.A.S., omitiendo mencionar adicionalmente los atrasos atribuibles al proyecto (falta de suministro de concreto, falta de suministro de acero, falta de disponibilidad de formaleta, no autorización de desencofrado, etc.) completamente atribuibles a BUENDÍA & LÓPEZ S.A.S. y detallado en las pruebas anexadas al proceso.

El tribunal dio por cierto de manera irrefutable el hecho de que los sobrecostos argumentados por BUENDÍA & LOPEZ S.A.S. son atribuibles a SIIA S.A.S., omitiendo mencionar que durante el proceso se probó de manera clara el hecho de que no existe notificación alguna de estos supuestos defectos hasta antes del inicio del proceso ante la Cámara de Comercio, de modo que no fue viable determinar la eventual responsabilidad de parte de SIIA S.A.S. y sin que fuese posible atender los que en teoría aplicarían y condenando a SIIA S.A.S. a cubrir costos de arreglos determinados y adelantados de manera directa por BUENDIA & LÓPEZ S.A.S.

Se obvia por parte del tribunal mencionar el hecho de que el contrato establece claramente que deben notificarse al Contratista los errores detectados para ser atendidos de su parte, claro está, una vez determinada su responsabilidad.

El Tribunal, sin prueba alguna, afirma de manera categórica que BUENDÍA & LÓPEZ S.A.S. cumplió todas sus obligaciones contractuales, y que SIIA S.A.S. “Incumplió el contrato o no se allanó a cumplirlo”, omitiendo mencionar que dentro del proceso se anexaron pruebas escritas que evidencian la total disposición de SIIA S.A.S., para atender las observaciones realizadas por parte de BUENDIA Y LÓPEZ S.A.S., obviando el hecho probado de terminación de contrato de manera irregular (sin soportes válidos con simple mención verbal de “diferencias irreconciliables”) siendo notificados de manera oficial solo hasta el 22 de Febrero de 2022, mediante oficio que fue objetado de parte de SIIA S.A.S., documentos que hacen parte del acervo probatorio del proceso. Esto sumado al hecho de la prohibición de ingreso a obra de personal de SIIA S.A.S. en fecha 21 de diciembre de 2021, omitiendo mencionar que incluso el representante legal de Buendía & López S.A.S. al momento de leer esta acta, mencionó hechos NO INCLUIDOS EN LA MISMA, con el único objetivo de

demostrar situaciones inexistentes y demostrar que, en teoría, no se había prohibido el ingreso a obra y que SIIA S.A.S. se había retirado por voluntad propia.

Al configurarse el defecto sustancial y fáctico relacionados, se concluye, que la acción de tutela contra el laudo arbitral del 1º de octubre de 2024, debe declararse procedente.

PRETENSIONES

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Nacional, de la sociedad **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA APLICADA – SIIA – INGENIEROS ASOCIADOS S. A. S.**, vulnerados por el **TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA – ÁRBITRO JULIO CESAR GÓMEZ GALLEGO**, al proferir el laudo arbitral del 1º de octubre de 2024.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE a dicho tribunal, que proceda a proferir nuevo laudo en el que tenga en cuenta la totalidad del clausulado del contrato de obra número 005 del 1º de febrero de 2021, la tolerancia (aquiescencia tácita) de las partes que modificaron las cláusulas del citado contrato y que tenga en cuenta las normas sustanciales que regulan el contrato de obra, en especial, el artículo 2059 del Código Civil.

PRUEBAS

Con la presente tutela se aporta el link del expediente arbitral. En caso de ser necesario, solicítese a la Cámara de Comercio de Armenia, el link del mismo expediente.

https://camaradecomerciodearmeni116-my.sharepoint.com/personal/PGIVKELB40OS56AY0AIVLW/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2FPGIVKELB40OS56AY0AIVLW%2FDocuments%2F2%2E%20TRIBUNALES

En casos de no permitir acceso directo, solicitamos respetuosamente sea copiado y pegado en navegador para acceder al Drive, o en su defecto, se requiera a la Cámara de Comercio de Armenia, el envío del expediente digital del trámite arbitral mencionado en esta tutela. Lo anterior, dado que es un expediente bastante extenso y no permite cargarlo en la página de tutela en línea.

ANEXOS

Aporto con la presente tutela el certificado de existencia y representación legal de la sociedad **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA APLICADA – SIIA – INGENIEROS ASOCIADOS S. A. S.** y Cédula de Ciudadanía para acreditar que soy su representante legal.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no se ha instaurado otra acción de tutela con fundamento en los mismos hechos y derechos relacionados en la presente y contra las mismas autoridades aquí reclamadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamentos de derecho cito los artículos 23, 83 y 86 de la Constitución Política de Colombia, Decreto 2591 de 1991, Decreto 306 de 1992, Decreto 1382 de 2000.

NOTIFICACIONES

La sociedad accionante y el suscrito representante legal recibiremos notificaciones en el correo electrónico galzat7@gmail.com y galzat@hotmail.com.

Atentamente,

GIOVANNI ÁLZATE BELTRÁN
c. c. 89.005.154 de Armenia
Gerente sociedad accionante